

en que priva de la jurisdicción al Juez que innova, cuando la competencia se sostiene entre jueces de diversos Estados ó entre jueces federales y de Estado; por que atendida la esencia del sistema federal y siguiendo los preceptos constitucionales, esa disposición debe considerarse contraria á la soberanía de la Unión ó de los Estados; puesto que por ella no solo se priva de la jurisdicción al Juez innovador sino al Tribunal federal ó de algun estado, invadiéndose por lo mismo las atribuciones y lastimándose los derechos federales ó locales en su respectivo caso; de conformidad con lo pedido por el C. fiscal, se declara:

Primero; que el Juez de Durango es competente para conocer del juicio mencionado.

Segundo; no hay condenación de costas.

Tercero: Devuélvase las actuaciones al Juez de Durango, con copia certificada de esta sentencia; remitiéndose copia igual al Juez 2º de lo civil de esta ciudad, para los efectos consiguientes.

Cuarto: hagase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron (firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias, México siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta.*

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Gerardo de la Torre, contra una orden de prisión dictada por el C. Gefe político de San Juan del Río.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor dice: que el C. Gerardo de la Torre y Rubí ha interpuesto el recurso de amparo, con motivo de haber sido condenado por un jurado de imprenta á la pena de quince días de prisión, á causa de haberse publicado por el quejoso un artículo bajo el rubro de peculado, en que ataca al ayuntamiento de San Juan del Río.

El ejercicio que tiene el hombre de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones sin necesidad de exámen, revisión, ó censura alguna anterior á su publicación, es uno de sus inalienables derechos. La facultad de pensar depende de la organización del hombre así como la de transmitir su pensamiento. Por lo mismo, estriba en el derecho natural, y no es una consecuencia de la sociedad, ni una concesión de la ley, sino propiedad inherente al hombre y enclavada, por decirlo así, en su misma naturaleza. Así pues, el acto de dar á luz por medio de la prensa los propios pensamientos, no constituye por sí mismo un delito, sino que crea piezas de convicción que sirven para establecer su prueba.

Así por ejemplo; un escrito sedicioso no es un delito como no lo es el arma que ha servido á un asesino; sino la misma sedición á que provoca el escrito.

Debe por lo mismo tenerse muy presente la distinción entre el delito y su instrumento, por ser de importantes consecuencias. En el caso, no puede considerarse

que el acto de acusar á un ayuntamiento de peculado importe un delito, y siendo un acto lícito, no puede cambiar su naturaleza por la publicidad dada á la acusación. Si esta es acaso calumniosa, tienen expeditos los ofendidos para acudir á un tribunal común y obligar al columniador á que pruebe sus asertos ó sufra la pena que en su defecto le imponga la ley.

Cuando los que mandan son nuevos en la carrera de la libertad, ponen su principal cuidado en contestar á los ataques de la prensa con acusaciones: no están habituados á despreciar la calumnia y á descansar en su buena conducta; y esto hace que la libertad de la prensa tenga tan poco ejercicio, que á pesar de las leyes mas favorables á ellas se encuentra maniatada en fuerza de la oposicion que se lo levanta y obstáculos que se le suscitan. La Constitucion federal de la República establece por únicos límites á la libertad de imprenta, el respeto á la vida privada, á la moral y á la paz pública. Y no atacando el artículo en cuestion sino actos públicos del Ayuntamiento de San Juan del Rio, no pudieron los jurados infringir esta disposicion excediéndose de sus límites.

Con todo, habiendo obrado como jueces en los términos que previene el art. 7º de la Constitucion, no cabe el amparo solicitado. Y, así pide el Promotor se sirva vñ. declararlo.

Querétaro, Junio veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*Luis Castañeda.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Querétaro, Julio diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Gerardo de la Torre contra el C. prefecto de San Juan del Rio, por haber violado los artículos 6, 7 y 16 de la Constitucion general. Visto el escrito y do-

cumentos que la parte quejosa presentó. Visto el auto de sobrecimiento; los telégramas, el pedimento del C. promotor fiscal. Vista la certificacion del escribano Mariano Maldonado que acompañó el actor á su segundo escrito. Visto el oficio que con calidad de informe dió el C. prefecto; el certificado que sirvió de justificante, con todo lo demas que se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que la facultad concedida en los artículos 6º y 7º de la Constitucion general, nadie puede atacarla, pues que la manifestacion de las ideas lo mismo que la facultad de escribir y publicar escritos son unos de los derechos mas sagrados del hombre y están inibitos, por decirlo así en su propia naturaleza, como bien dijo el C. Promotor fiscal en su pedimento de fojas.

Considerando: que el artículo del periódico "La Espada de Damocles" que tiene por título "Peculado" no vulneró la ley de imprenta de 4 de Mayo de 1868, por no haber atacado los límites que ella menciona, cuales son el respecto á la vida privada, á la moral y á la paz pública, pues el autor del referido artículo no afirmó que el Ayuntamiento había cometido el delito de peculado, sino tan solo que asistían rumores, y antes por el contrario proporcionó una ocasion favorable al cuerpo municipal para que patentizase la pureza de sus actos, desvaneciendo la sospecha que comenzaba á estenderse en el pueblo, razon por la cual no debió haberse formado jurado, y por lo mismo hizo muy bien el C. Gerardo de la Torre en protestar contra todos los actos que por sí eran nulos, pues malamente se nombraba Juez que conociera de un delito cuando este no existia.

Considerando: que el primer regidor C. Manuel Fernandez carecia de facultades para denunciar el impreso de que se viene haciendo mérito, porque conforme á los artículos 125 y 130 de la Constitucion del Estado, la facultad de representar al Ayuntamiento la tiene el presidente, el cual tampoco podia haber hecho el denuncia porque

el artículo de la ley de imprenta dice: "Se falta á la vida privada, siempre que se atribuya á un individuo algun vicio ó el delito etc." y la corporacion no es un individuo, habiendo por lo mismo, el expresado Manuel Fernandez, quebrantado el mencionado art. 3º de la ley de 4 de Febrero citada, la cual tambien se infringió en su artículo 18; pues segun consta de autos, se mandó recoger el impreso y se exigió fianza al C. la Torre indobidamente, porque tal procedimiento solo tiene lugar cuando el impreso es denunciado como contrario al órden público ó moral, pero de ninguna manera cuando ha sido por falta á la vida privada, como lo hizo el primer regidor, segun es de verse á la foja 5.

Considerando: que el C. profecto de San Juan del Rio quebrantó abiertamente el art. 16 de la Constitucion de la República, por haber puesto preso por solo su órden verbal al C. Gerardo de la Torre, segun está probado en la foja 9ª de estos autos; pues que el referido art. 16 terminantemente previene que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, etc. sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente.

Considerando: que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, exactamente aplicadas á él, y en el presente caso ha habido mala aplicacion de la ley de imprenta, por haberse considerado como atentario á la vida privada el artículo denunciado, siendo así que el Ayuntamiento no la tiene segun se ha dicho, pues es bien sabido que este se compone de funcionarios públicos por lo cual quedó violado el art. 14 constitucional.

Considerando por último: que en los procedimientos habidos contra el C. Gerardo de la Torre han atacado los artículos 6º y 7º de la Constitucion general, habiéndole quitado con tales hechos el sagrado derecho de escribir y manifestar sus ideas que aquellos le concedieran con toda la amplitud de-

bida, pues para ello no tienen ingerencias la autoridades judicial administrativa, segun se ve del contesto del art. 6º citado. Por estos considerandos y con fundamento del art. 1º fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, 6º, 7º, 14 y 16 de la Constitucion general, 3º y 18 de la ley de 4 de Febrero de 1868, el C. Juez dijo: que debia de fallar y falla. Que la justicia federal ampara y protege al C. Gerardo de la Torre por las violaciones que se cometieron contra su persona; haciéndose saber esta sentencia que se publicará en el periódico, en virtud de lo prevenido por la ley de la materia. Elévase la presente á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para los efectos del art. 18 de la ley citada y repóngase por la parte promovente el papel comun de que se ha usado con el del sello correspondiente. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito primer suplente Lic. Mariano Pimentel. Doy fé.—*Mariano Pimentel.*—*Ante mí.—Francisco Ruiz.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Gerardo de la Torre, contra los procedimientos del gefe político de San Juan del Rio, en virtud de los cuales fué reducido á prision sin los requisitos establecidos por el art. 16 de la Constitucion general de la República, y sometido por el gefe administrativo de San Juan del Rio á un jurado de imprenta, por denuncia que de un art. publicado en "La espada de Damocles" hizo el primer regidor de aquella localidad, C. Manuel Fernandez, haciendo extensiva su queja contra el jurado, que sin jurisdiccion alguna conoció del referido

denuncio, y lo condenó á quince dias de prision, alegando que con los procedimientos mencionados se han violado las garantías otorgadas por los artículos 6º 7º 14 y 16 del pacto federal de la Nacion, y 3º y 16 de la ley de 4 de Marzo de 1868. Considerando: que el artículo denunciado se refiere á funcionarios públicos en asuntos de su oficio, y que tanto el art. constitucional como la ley de imprenta vigente ya citada, al consignar la libre emision del pensamiento por medio de la prensa, no han puesto mas restricciones que las que se encuentran en los artículos 3º y 16; y entre los que se hallan los ataques á la vida privada del individuo, sin que pueda hacerse extensiva á la vida pública de los funcionarios y por actos referentes á su oficio. Considerando finalmente: que tanto los actos del gefe político que redujo á prision al quejoso, como los de la autoridad que convocó al jurado, y los de este, que conoció de un delito que no estaba cometido por las leyes á su jurisdiccion, han violado las garantías que otorgan los artículos 6º 7º 14 y 16 de la Constitucion general de la República, y con ese fundamento y el de los artículos 1º fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 869, y 3º y 18 de la ley de 4 de Marzo de 1868, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Querétaro, que decreta en nombre de los Poderes de la Union, amparar y proteger al C. Gerardo de la Torre, en las garantías á que se refiere en su escrito de demanda, contra las violaciones hechas por las autoridades contra quienes se ha solicitado el presente juicio.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Me-

xicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México veintidos de Agosto de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Contra D. José M. Olvera por denuncia de estar descubierta en la Administracion de Correos de San Juan del Rio.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DE DISTRITO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

El Promotor fiscal dice: que esta causa se comenzó á formar de oficio el juzgado de letras de San Juan del Rio, contra D. José M. Olvera, administrador que fué de correos de dicha poblacion; por denuncia que hizo en su contra el encargado de esa administracion C. Juan Logarreta, cuando recibió orden de hacer entrega de ella á Olvera, nombrado al efecto en el mes de Febrero de 1868. Entonces presentó la cuenta que obra á fojas 5 y 6 de este expediente firmada por el C. Julio Ruiz el 5 de Marzo de 1860. Es de advertir que Ruiz fué el sucesor dado á Olvera por el gefe reaccionario Osorio al haberlo destituido como empleado del gobierno nacional. Esta acusacion procede en consecuencia de enemigos del acusado y la cuenta presentada por ellos debe ser recibida con extrema desconfianza.

Olvera ha manifestado que esa cuenta no puede tener valor alguno, por haber sido hecha sin su presencia y sin vista de las constancias respectivas, por un enemigo suyo: que, habia presentado á la administracion general la cuenta verdadera en